

La Izquierda en América Latina, entre la realidad de sus conflictos y la necesidad de sus alianzas políticas

Daniel Rafuls Pineda
(Profesor de Teoría Sociopolítica de la Universidad de la Habana).

Acerca del por qué de esta incursión...

Pocos conocedores del conflicto *Izquierda-Derecha*, en su acepción política, ponen en duda que durante los últimos años, ha habido un significativo retroceso de las fuerzas conservadoras en distintas regiones geográficas. Asimismo pocos cuestionan que en ese sentido, es justamente Latinoamérica, el área que mayores avances ha revelado en el logro de la unidad revolucionaria y que mejores resultados ha tenido en el rescate de sus conquistas sociales.

Los puntos sin embargo en que la mayoría de los estudiosos del referido conflicto, no nos hemos puesto de acuerdo todavía, son en qué definir como *Izquierda y Derecha*, y en qué hacer para estructurar proyectos políticos, económicos y sociales, mínimamente coherentes, sustentables y estables, que permitan revertir la situación actual en que desarrollan su vida los sectores tradicionalmente excluidos.

Derivado de los anteriores cuestionamientos, otro de los principales dilemas en que hoy se debaten políticos y académicos ocupados en brindar solución a los problemas de la llamada periferia, es en dar respuestas a las preguntas de ¿con quién aliarse para acceder al gobierno, y con quién, para iniciar la construcción de una nueva sociedad?, lo que tampoco parece un tema aplazable.

Esto significa, que aunque existen muchas experiencias, en nuestros países, que muestran en la práctica, cómo la *izquierda* puede llegar a ser la principal fuerza política en la oposición, y cómo ha logrado conquistar hasta algunos gobiernos, eso, no necesariamente, es el resultado de un consenso teórico al respecto, sino de acciones que en muchas ocasiones son coyunturales, y que, en general, tienen como referente la intuición política.

En medio de esta polémica, que tiene como centro de reflexión la actuación del sujeto revolucionario, parece oportuno introducir otros análisis, que si bien no necesariamente, van a aclarar todas las interrogantes, al menos pudieran contribuir a repensarlas. Esta es justamente la propuesta del presente trabajo.

Algunas conceptualizaciones del término...

Sobre el tópico de la *izquierda* como concepto, existen diferentes posiciones. Unas asumen que el término no es preciso en tanto no existe una sola *izquierda*, sino diferentes, y de acuerdo a sus tácticas y estrategias de reformar el capitalismo o de superarlo como sistema social, con distintos grados de radicalidad. Y otras suponen de *izquierda* sólo a aquellas fuerzas que presentan programas políticos propios antisistema.

En medio de ese debate por ejemplo, el excanciller de México, Jorge Castañeda, en su obra *La utopía desarmada*¹, cuando ya daba señales de ser un hombre de derecha, expresó que la *izquierda* tenía un sentido contestatario y subversivo, y estaba compuesta por los partidos

¹ México: Ediciones Planeta, 1993. Esta obra fue escrita con la clara intención de destruir la significación moral del movimiento zapatista y el resto de las fuerzas de izquierda

comunistas tradicionales, la izquierda nacionalista o populista, las organizaciones político - militares y las reformistas.

Mientras algunos autores al estilo de Carlos M. Vilas, percibían a la *izquierda* como “... las organizaciones políticas y sociales que hacen de lo popular el referente principal de su acción política”², otros como el cubano Fernando Martínez Heredia³, la han visto más cercana a una simple alusión metafórica que a un concepto propiamente dicho.

Este autor analiza el término, recurriendo a dos aspectos metodológicamente claves para determinar la esencia de cualquier fenómeno social. En su sentido histórico, recuerda que el concepto *izquierda* tuvo su origen años después de la Revolución Francesa, cuando los parlamentarios se sentaron a la derecha e izquierda del rey según defendieran o rechazaran los privilegios del absolutismo. La cara lógica de la vigencia actual de ese concepto, él la apreció en la posibilidad de que símbolos de épocas pasadas pudieran conservar sus significados aún en etapas ulteriores del desarrollo humano.

El investigador del Centro de Estudios Europeos de Cuba Frank Álvarez por su lado, brinda otra definición plausible sobre ese concepto. Para él: “Por izquierda asumimos un término referencial, surgido del curso de la práctica política con carácter histórico concreto. Generalmente con él se identifican las fuerzas progresistas y renovadoras, contestatarias del orden establecido, que pretenden renovar determinados valores básicos (ideológicos, políticos, éticos, sociales y económicos) de aquellos sistemas que ya no son representativos del avance, la renovación y el progreso social”⁴

Pero existe otra manera de interpretar el término *izquierda*. Es la que expone el mexicano Adolfo Gilly, al transcribir unas palabras del conocido filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, en un encuentro en Perú, a principios del 2004, acerca del futuro de esa corriente política. En aquella ocasión él señaló: “Izquierda puede ser un término equivoco. Me parece preferible usarlo en plural: no la izquierda, sino las izquierdas. Tendríamos así al menos cuatro izquierdas: una izquierda democrática, liberal, burguesa, connatural al sistema capitalista; una izquierda socialdemócrata, que quiere mejorar las condiciones sociales dentro de los marcos de ese mismo sistema; una izquierda social, que es crítica del capitalismo, pero no le ve una alternativa, representada sobre todo por los movimientos sociales, y una izquierda socialista opuesta al capitalismo, que propone una nueva organización de la sociedad”⁵.

Lo más común de todas estas interpretaciones sobre el término, como se puede apreciar, discrimina los elementos de *izquierda* de los de *la derecha*, a partir de su posición con respecto a la categoría Progreso. Este principio, así entendido, si bien puede reforzar la idea de que los partidos comunistas y otras fuerzas políticas que luchan contra distintos tipos de exclusión social, pueden ser considerados de *izquierda*, también permite cuestionar que muchos representantes del movimiento socialdemócrata y socialista en Europa, y sus

² En la apreciación de este autor, “lo popular” es el campo donde coinciden la marginación política y la explotación económica junto a la pobreza. Ver “La izquierda en América Latina: presente y futuro”. Ponencia presentada en el seminario “Alternativas de izquierda al Neoliberalismo”. La Habana: Centro de estudios sobre América. 12-15 de febrero de 1996. p. 4).

³ Ala izquierda y Marxismo en Cuba. En: *Temas*, No. 3, julio - septiembre, 1995, p. 16-17

⁴ La izquierda en Europa: situación actual y perspectivas. Revista de Estudios Europeos Mayo-agosto 2002 pag.91

⁵ Ver: Diario La Jornada. Política. México D.F. Viernes 23 de Enero del 2004.

congéneres en América Latina, tan apegados a las políticas neoliberales en los últimos años, pueda seguir siendo conceptualizado como una fuerza política de signo esencialmente distinto al que representa la *derecha* tradicional.

El trabajo que se presenta hoy ante ustedes sin embargo, no tendrá como centro sugerir una definición más que pueda ponernos de acuerdo en la interpretación de ese término, sino exponer algunas opiniones acerca de los proyectos de gobierno que promueven diversas fuerzas que se catalogan de *izquierda*, y, sobre todo, señalar cómo esas fuerzas, en la práctica, han articulado sus alianzas políticas.

Formas fundamentales en que se ha revelado la actuación de las fuerzas de izquierda.

Aunque dentro de los sectores revolucionarios de nuestro Continente, se acepta que entre el Río Bravo y La Patagonia, existen amigos y enemigos comunes de clase, y ventajas y obstáculos también similares, asimismo hay consenso en cuanto a que las vías para acceder al gobierno, y las tácticas para conservarlo y dar solución a los problemas sociales más acuciantes, no siempre muestran el mismo desarrollo, tienen que ser las mismas, ni pueden ser predecibles en todo momento. Lo que dificulta hacer generalizaciones.

Esto significa, que de la misma manera en que no era posible pronosticar hace poco más de 15 años, que un académico y político de izquierda tan renombrado como Fernando Enrique Cardoso, en Brasil, iba a continuar, durante dos mandatos, las políticas neoliberales que iniciaron sus predecesores de *derecha*, tampoco era fácil prever que un militante del Partido Justicialista argentino como Nestor Kirchner, correligionario político de Carlos Saúl Menem, y sin historia política dentro de las fuerzas tradicionales de *izquierda* en ese país, iba a promover proyectos anti FMI, nada conservadores, a favor de los sectores populares.

Una manera muy ilustrativa de reflejar estas indefiniciones en el ámbito teórico, que en algún sentido limita dar respuestas coherentes en el orden práctico, es la forma en que actualmente se esta revelando, a nivel latinoamericano, la actuación de algunas fuerzas de izquierda. Estas, con respecto a la manera en que conciben las alianzas políticas y las nuevas formas de construcción social, pueden ser organizadas en tres grupos fundamentales:

Un primer grupo de fuerzas que es capaz de derrocar gobiernos, pero que no logran articular un proyecto conjunto de transformación social que les permita arribar al poder ejecutivo e intentar dar al traste de manera coherente con el modelo de exclusión social imperante.

Un segundo grupo, con una gran trayectoria política en la oposición que han concertado amplios proyectos políticos de reformas dentro del sistema capitalista y que ahora ocupan gobierno.

Y un tercer grupo de más o menos grandes formaciones políticas, con mayor o menos trayectoria en la oposición, que desde antes de llegar al gobierno, y sobre todo, después de su conquista, proponen reformas mas radicales que intentan dar al traste con el sistema capitalista

En el PRIMER GRUPO de experiencias fundamentales de *izquierda* que son capaces hasta de derrocar gobiernos pero que no logran articular sus fuerzas internas de manera permanente y coherente, están los casos de Ecuador y Perú.

En Ecuador por ejemplo, en abril del año pasado, las agrupaciones políticas de *izquierda* y la Federación Unitaria de Trabajadores (FUT) lograron expulsar al entonces Presidente Lucio

Gutiérrez del gobierno (como antes ya habían hecho con Yamil Mashuad y Abdala Bucaram)⁶, pero no han podido revertir la decisión del bloque mayoritario, progubernamental, del Parlamento (tomada en noviembre del 2004), de reestructurar los Tribunales Constitucional y Supremo Electoral, y la Corte Suprema de Justicia, que había desbalanceado el poder, todavía más, a favor de los sectores oligárquicos del país. Estas instituciones designadas para hacer justicia, contrariamente a la voluntad popular, llegaron hasta a anular los juicios contra los ex presidentes Abdala Bucaram, acusado de dos delitos de malversación de fondos, y Gustavo Novoa, acusado de irregularidades cometidas durante la renegociación de la Deuda Externa.

En este país, según se percibe entre muchos especialistas, las principales fuerzas de oposición al gobierno; la Izquierda democrática (ID), el Partido Social Cristiano y el Movimiento Indígena Pachakutik, por lo que se considera, sus fracasados intentos de controlar los espacios de poder, sin pensar, de manera suficiente, en los intereses nacionales o de la clase trabajadora, han sufrido un constante desgaste y desprestigio. Llama la atención, que desde el pasado mes de octubre haya un gran entusiasmo popular de respaldo al actual Presidente, Alfredo Palacios, por su solicitud al Tribunal Supremo Electoral (TSE), de un referéndum para pedir al pueblo su posición con respecto a una posible Asamblea Constituyente, y que después, ante la decisión de ese órgano de rechazar la solicitud (cinco votos contra dos), por supuestamente ser anticonstitucional, todavía no exista una respuesta única y sólida, de al menos las tres fuerzas políticas más importantes de la oposición.

Algo parecido ha ocurrido a lo largo del último lustro en Perú. Pero aunque en este país, no se ha podido separar de la Presidencia a su actual mandatario, Alejandro Toledo⁷, con un índice de aprobación promedio popular, de sólo 8-9% desde el 2004, sus constantes conflictos con otras fuerzas conservadoras, y el permanente rechazo popular a su gestión, lo han obligado a recomponer, periódicamente, sus distintas propuestas de ministro para cada gobierno⁸.

Desde que Toledo asumió la Presidencia en el 2000, los reclamos populares de rechazo a su incondicional entrega al gobierno de George Bush y su brutal política de ajuste, acorde a las exigencias de las instituciones financieras internacionales, han sido crecientes de manera estable.

Durante los más recientes dos años, particular actividad han tenido decenas de miles campesinos cocaleros de la selva central del Perú, y de otras regiones del país, contra la política oficial, respaldada por Washington, en relación con el cultivo de la hoja de coca (de consumo milenario en las regiones andinas de América del Sur).

Asimismo, en mayo pasado, la Confederación Nacional de Comunidades afectadas por la minería, que denunció un proyecto de ley general sobre la privatización y el uso del agua, convocó a una manifestación popular para evitar que ese líquido pasara a control privado.

Otro importante rechazo a nivel nacional, ha tenido la posible firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) que el gobierno peruano ha concertado con su similar norteamericano. En esta lucha, se destaca la confederación general de Trabajadores del Perú (CGTP) y la

⁶ Después de su destitución, Lucio Gutiérrez partió hacia Brasil y pidió asilo en Colombia. De ahí, el pasado 13 de octubre retorno a Quito, donde se encuentra encarcelado. El esta acusado por el Congreso Nacional de atentar contra los poderes del Estado.

⁷ El encabeza la alianza de Perú Posible y el Frente Independiente Moralizador.

⁸ La última crisis política de su gobierno explotó a raíz de la designación, por parte de Alejandro Toledo, de su gran aliado Fernando Olivera, como Canciller del país. Esto dio lugar a la renuncia, en pleno, del gabinete, y a la conformación de una nueva propuesta, ahora encabezada por su hasta entonces ministro de economía, el neoliberal, Pedro Pablo Kuczynski, como nuevo primer ministro, y a su ratificación por el parlamento.

Convención Nacional del Agro (CONVENAGRO), que, por un lado, tratan de evitar el recorte de los derechos de los trabajadores, y por otro, exigen la eliminación de los subsidios agrícolas, por parte del gobierno norteamericano a sus productores internos, para evitar una competencia, de por sí, desigual, con los agricultores peruanos. Los maestros, las enfermeras, y hasta la propia policía, han demandado mejoras salariales por la carestía de la vida.

Esta reacción popular, que ha mostrado otras formas múltiples de manifestación, ha tenido como marco político de referencia, las obvias contradicciones dentro de las propias fuerzas de derecha, que desde la renuncia de Alberto Fujimori a su cargo, mediante el inusual procedimiento de comunicar su decisión cuando llegó a Japón, no han dejado de existir.

Particularmente ilustrativo en este sentido, fue la publicación, el 25 de enero del año pasado, de un Editorial en el periódico conservador El Comercio, que demostró como la derecha puede unirse, en bloque, hasta contra otra de sus propias fracciones.

En ese diario, vocero del más poderoso consorcio periodístico de la nación, la presidenta de la coalición derechista Unidad Nacional, Lourdes Flores, coincidiendo con la posición oficial del periódico, reclamó al Presidente “oxigenar” al régimen, y designar un nuevo equipo ministerial, encabezado por un político independiente. Tal posición, también fue compartida por el Partido Somos Perú, y por los tradicionales Partido Acción Popular y Aprista (mayor partido de oposición)⁹, que buscan colocarse en el denominado centro del espectro ideológico.

Los conflictos dentro de la derecha son tales, que representantes de la misma Unión Nacional, los legisladores, José Barba y Rafael Rey, han buscado la destitución del gobernante acusándolo de varios escándalos que sacuden el ambiente político nacional.

Esta coyuntura sin embargo, donde durante años, se han conjugado acción popular y conflictos dentro de la *derecha*, no ha sido suficientemente aprovechada por las agrupaciones políticas de *izquierda*, para organizar e imponer su fuerza en el Parlamento, donde son una pequeña minoría. Sólo en los últimos meses, han aparecido algunos indicios, que marcan, al parecer, una tendencia contraria.

Los pasados 11 y 12 de febrero del 2005, se celebró la primera Convención de la Coordinadora Nacional de Izquierda y Partidos Progresistas, que unió en acciones concretas, a 10 organizaciones progresistas del país. Allí, se aprobó un Documento de siete puntos, titulado “Declaración de la Izquierda Peruana”, donde los participantes expresaron su profunda satisfacción por haber concertado esa unidad, y destacaron que la Coordinadora, ha decidido ponerse al frente de la tarea de impulsar una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales, para presentar un candidato único ante las próximas elecciones presidenciales y para elegir sus candidatos comunes al Parlamento.

Con la anuencia de todas las organizaciones presentes, la alianza quedó integrada por los partidos Comunista Peruano, Comunista del Perú (Patria Roja), Socialista Revolucionario, Unión por el Perú, y nacionalista de las Comunidades Andinas. A ella también se sumaron los movimiento Nueva Izquierda y Democrático Pueblo Unido, los frentes Populares y Obreros, Campesino, Estudiantil y Popular; y el Comité Malpica. Aunque esto no garantiza que la izquierda revolucionaria peruana, definitivamente, ha comprendido la importancia de superar las contradicciones internas de otras épocas, y avanzar hacia la conformación de un frente único antineoliberal, tampoco niega que su confirmación real, sólo lo dará la práctica histórica.

Por lo pronto, los revolucionarios peruanos han encontrado su propio candidato presidencial que responde al nombre de Ollanta Humala; un teniente coronel retirado que hace más de un año encabezó un alzamiento de ex militares para demandar la renuncia del Presidente y que

⁹ A partir de mayo de ese año, esta organización (APRA), promovió una moción de acusación constitucional contra el Presidente, por un supuesto fraude, en el registro de firmas, que le facilitó su triunfo del 2000.

pese a su corta historia política, luego de apresado y liberado, hoy tiene un significativo respaldo popular.

En el SEGUNDO GRUPO de experiencias fundamentales de *izquierda* con una gran trayectoria política en la oposición, que han logrado concertar amplios proyectos políticos de reformas dentro de la sociedad capitalista, y que ahora ocupan el gobierno, están los casos del Partido del Trabajo (PT) brasileño y el Frente Amplio (FA) en Uruguay.

Mientras el P.T. por ejemplo en sus inicios, se articuló como una amplia formación política con varias tendencias independientes en su interior, que tenían como plataforma estratégica fundamental la construcción del socialismo, sus últimos pasos para alcanzar el gobierno en octubre del 2002, y las primeras medidas que ha tomado para conservarlo hasta hoy, marcan un notable distanciamiento de sus proyectos originales.

Aunque el gobierno de Lula ha logrado controlar la inflación, garantizar el crecimiento económico estable, y promover importantes beneficios sociales a una parte mayoritaria de la población, y particularmente a los sectores populares de menos recursos, su permanente búsqueda de acercamiento a las fuerzas conservadoras y de *centroderecha*¹⁰, para garantizar mayoría en la toma de decisiones, ha limitado sus posibilidades reales de detener las políticas fiscales de ajuste, y de llevar a la práctica, en toda su magnitud, la Reforma Agraria que estipula la Constitución Nacional vigente desde 1988.

Al parecer, su mayoría de 91 escaños en una Cámara de Diputados de 513 personas y su tercer lugar en el Senado donde ocupa 14 curules de un total de 81, no le da el control necesario del Congreso para hacer reformas más populares y menos polémicas a favor de las fuerzas progresistas. Este, parece ser el cuadro que justificaba al teólogo de la Liberación Frei Betto, cuando a principios del 2003 expresara que Lula no “concentró en sus manos todos los poderes... Y vamos a necesitar mucha negociación para llegar a cualquier consenso”¹¹. Tal consideración, percibida como para “aclarar” a los que ven demasiado lento ese proceso, también puede ser complementada con las propias palabras del Presidente brasileño, cuando el 20 de octubre pasado, durante la celebración del último Congreso del Partido Comunista de su país, ratificó: “En Brasil no se hizo una revolución, se ganó una elección”.

Un panorama, en algún sentido distinto, parece mostrar el Frente Amplio en Uruguay.

Como Lula a fines del 2002, Tabare Vazquez¹² en octubre del 2004, también ganó las elecciones presidenciales. Pero a diferencia del primero, el líder de la *izquierda* uruguaya consiguió el triunfo en primera vuelta electoral, y sin compromisos de principio con ninguna fuerza de *derecha* o *centroderecha*.

¹⁰ Para alcanzar su victoria del 46,44% de los votos validos en la primera vuelta electoral, el PT se alió al conservador Partido Liberal (PL). Para alcanzar su victoria de 61% (55 millones de votos) de los votos validos en la segunda vuelta electoral, el PT concertó otro pacto con el también conservador Partido laborista de Brasil (PTB). Tras el triunfo de Luis I. Lula da Silva, y con el objetivo de alcanzar mayoría absoluta en el Parlamento, la cúpula gobernante del PT inició conversaciones con el gigante centroderechista y ex cogobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Aunque el respaldo esperado no se logro, al menos acordaron apoyar al candidato del PT como presidente de la Cámara de Diputados, y al representante del PMDB, como Presidente del Senado. En Febrero del 2005, por lo que algunos consideran errores internos, el PT perdió la presidencia de la Cámara Baja.

¹¹ Ver: Entrevista Pública que concediera el domingo 27 de julio del 2003 al Diario Jornal do Brasil.

¹² A fines de 1999, T. Vázquez ganó la primera vuela electoral para presidir el país, pero por el diseño electoral que tiene establecido un balotaje, el Partido Nacional (blanco), brindó su apoyo al candidato del Partido Colorado, Jorge Batlle, y este, ganó las elecciones.

En las nuevas condiciones de gobierno, el casi recién estrenado Presidente, podrá contar con otro hecho de enorme trascendencia para las fuerzas progresistas de ese país.

A partir del 1 de marzo del 2005, la coalición EP-FA-NM, pudo disponer de 16 escaños¹³ de un total de 30 senadores, y de 52 puestos en la Cámara de Representantes, de un total de 99¹⁴ diputados, lo que, sin dudas, le dará mayoría absoluta para poder aprobar determinados programas que pueda no compartir la derecha tradicional. Algo, sin embargo, parece no ser compatible con esa idea.

En la segunda quincena de febrero del 2005, a punto de tomar posesión de su cargo, el propio presidente Tabaré Vázquez, promovió el llamado Acuerdo de Entendimiento entre los partidos políticos en torno a temas esenciales como política económica, educacional y relaciones internacionales. Esto que a simple vista parece ser un pacto que sella los deseos comunes de gobernabilidad, de hecho supone que el nuevo gobierno, difícilmente, va a estimular reformas de mayor arraigo popular, que rebasen su compromiso de campaña electoral, y que por tanto contraríen a las fuerzas conservadoras. El argumento de su ministro de relaciones exteriores, Reinaldo Gargajo, de rechazar la posibilidad de que Cuba entre al MERCOSUR, por supuestamente no cumplir con la Cláusula Democrática, parece ser un indicio de esa tendencia.

Otro ejemplo que puede ilustrar que en Uruguay, la radicalización del proceso, entiéndase, la profundización de las reformas para redistribuir las riquezas a favor de los sectores más pobres, no depende tanto del control del EP-FA-NM del Congreso, sino de lo que se conciba o no como tarea del momento, y de lo que se piense dentro de la propia coalición, sobre lo que es el socialismo, son las propias palabras del alto dirigente de los Tupamaros, actual senador y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica. El ha dicho: “En Uruguay, hemos asumido las coordenadas de lo que podemos hacer en la situación actual, y pelear por proyectos que no den respuesta definitivas al viejo dilema de socialismo o capitalismo. Llamemos las cosas como son: en Uruguay, transitamos un camino reformista. No hay otra salida en el mundo que estamos.

Tenemos problemas muy espinosos como el de la comida, la vida de la gente...

Entonces, pará. No puedo discutir de socialismo, tengo que discutir de hambre. Sino, entre otras cosas, la masa no entiende. Ni la mejor teoría se digiere con el estómago vacío”¹⁵.

Así, bajo esta concepción, como posiblemente bajo el criterio de muchos moderados del PT, sino es que ella en lo más profundo esconde otras solapadas intenciones, los problemas del hambre, el desempleo, y la falta de atención y seguridad social, pueden ser resueltos dentro de los marcos del sistema institucional democrático burgués, y sin necesidad de reformas políticas de gran trascendencia, que garanticen institucionalmente la ausencia de esos problemas.

En el TERCER GRUPO de experiencias fundamentales de *izquierda* que recoge el accionar de más o menos grandes formaciones políticas, con mayor o menos trayectoria en la oposición, y que una vez en el gobierno, proponen reformas que intentan dar al traste con el sistema capitalista, están los casos del Movimiento V República en Venezuela, y el que parece proponerse Evo Morales en Bolivia.

¹³ A estos curules, se debe sumar el asiento del vicepresidente Rodolfo Nin Novoa que, por Ley, pasó a presidir el legislativo desde el 1 de Marzo del año pasado.

¹⁴ El resto de ambos puestos legislativos, lo ocupan representantes de los partidos tradicionales Nacional y Colorado, además de los independientes. Se debe destacar, que por primera vez, la Cámara de Diputados ha estado dirigida por una mujer, Nora Castro, del Frente Amplio.

¹⁵ Ver: Revista Orbe 6/11/04 p.3 Entrevista concedida a Alberto Salazar, enviado especial de PL en Montevideo.

En Venezuela por ejemplo, el entonces candidato presidencial, Hugo Chávez, que en 1998 basó toda su campaña electoral en la convocatoria a hacer una Asamblea Constituyente, y a realizar, lo que una vez alcanzado el triunfo, llamo “Revolución pacífica y democrática con una transformación a fondo de las estructuras políticas, económicas y sociales del país”¹⁶, fue, precisamente, quien le arrebató el triunfo a la *derecha*.

Las leyes electorales, poco democráticas, vigentes entonces, que declaraban Presidente al candidato que acumulara mayor cantidad de votos en la primera y única vuelta electoral, y que, hasta el momento, habían beneficiado, sobre todo, a las fuerzas conservadoras, fueron las que a su vez, facilitaron que, en esta ocasión, el casi desconocido candidato de la *izquierda*, obtuviera la victoria¹⁷.

La estrategia de gobierno seguida hasta hoy por el nuevo presidente, parece inédita en el contexto latinoamericano. Primero convocó a hacer una reestructuración política e institucional profunda en el país, que llegara, en una primera instancia, a facilitar la renovación completa de todos los poderes públicos (entre los que se destacaban el que representa el Presidente, los parlamentarios, los gobernadores e incluso los alcaldes), y después, con el respaldo de esta, a promover significativas transformaciones económico-sociales.

En este contexto, después de realizar la anunciada Asamblea Nacional Constituyente, un lugar especial lo ha ocupado la nueva Constitución Nacional, aprobada en diciembre de 1999¹⁸, con cuyo art.1 (del Título “Principios Fundamentales”) que comienza a llamar al Estado “República Bolivariana de Venezuela”, se marca la primera distinción simbólica sustancial de lo que fueran los anteriores sistemas políticos.

A diferencia de la vieja Constitución de 1961, estimulada por los promotores del Pacto de Punto Fijo de 1958 que, sobre todo, beneficiaba al sistema bipartidista protagonizado por los partidos Acción Democrática y COPEI (principales partidos tradicionales de Venezuela), el nuevo texto constitucional rompe con los fundamentos esenciales del otrora poder público nacional. En este sentido, para establecer un mayor y mejor control democrático sobre los ya establecidos poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se crean los poderes Ciudadano y Electoral¹⁹ con estructuras populares participativas amplias y más profundas.

Pero los propios tres poderes tradicionales también sufrieron cambios significativos.

En el Ejecutivo por ejemplo, se establece que el periodo presidencial aumenta de 5 a 6 años y se introduce la reelección inmediata, lo que al menos ahora, beneficia a las fuerzas en el gobierno o progubernamentales.

El Poder Legislativo queda reformado completamente. El anterior Congreso Nacional bicameral, que tenía más de 40 comisiones especializadas y contaba con una burocracia de miles de personas, ha sido sustituido por una Asamblea Nacional de carácter unicameral que cuenta sólo con 15 comisiones especializadas, un aproximado de 800 trabajadores y sustituye a las otrora poco efectivas asambleas legislativas, por cuerpos legislativos más democráticos.

¹⁶ Ver: Conferencia de Prensa efectuada el 1 de febrero de 1999 en el Club Militar.

¹⁷ Hugo Chávez contó con el 54,49% del apoyo popular, pero con un abstencionismo del 38, 2%. Ver: Granma 3/8/2000 p.7

¹⁸ Fue aprobada con el apoyo de 2 508 458 personas (71,26% de la población que fue a votar), un rechazo de 1 011 976 (28,75%) y el 54,29% de abstencionismo. Este último, entre otras razones, también motivado por malas condiciones climáticas en algunas regiones del país.

¹⁹ El primero, estará compuesto por la Fiscalía, la Contraloría del Estado y una Defensoría del Pueblo que velará de manera más efectiva por los intereses de la población. El poder electoral, por su lado, establece una amplia infraestructura que encabeza el Consejo Nacional Electoral (CNE) para atender todo tipo de comicios, incluso los referendos consultivos.

El Poder Judicial por su lado, tendrá como novedad, la desaparición de la desprestigiada Corte Suprema de Justicia y del órgano administrativo; el Consejo de Judicatura, y en su lugar quedará regido por el Tribunal Supremo de Justicia que, con notables tribulaciones hasta hoy, ha desarrollado un proceso de purga de jueces parciales y corruptos.

Aunque entre las transformaciones políticas e institucionales que establece la nueva Constitución resaltan con particular simbolismo la promoción del término asociaciones con fines políticos²⁰, en lugar de la categoría partidos políticos, para concurrir y postular a sus candidatos en los procesos electorales, lo más notorio en el texto, son los nuevos mecanismo de consulta popular, que otorga a los venezolanos un poder sin precedentes en la toma de decisiones.

A partir de esto, los ciudadanos, por voluntad propia, u organizados políticamente, podrán proponer iniciativas de ley, y convocar a consultas para ratificar o derogar normas aprobadas hasta por el propio Parlamento.

Una importancia particular para todas estas últimas conquistas señaladas, lo ocupan las rendiciones de cuentas de los representantes populares electos, y los llamados referendos revocatorios²¹ que pasado la mitad de las legislaturas, podrán separar de sus cargos a los funcionarios que ocupen cargos públicos electivos, desde el Presidente de la República, hasta los máximos representantes de las Juntas Parroquiales, pasando por todas las instancias representativas intermedias.

Otros elementos que consolidan el poder de las fuerzas que respaldan el proyecto político de Hugo Chávez, además de la propia constatación constitucional que refuerza la soberanía nacional sobre los yacimientos mineros e hidrocarburos, las aguas y la actividad petrolera, y sobre otras industrias, servicios y bienes de carácter estratégicos²², son las llamadas Leyes Orgánicas y las Habilitantes, que prevé la propia Constitución.

Mediante las primeras por ejemplo, ya han sido promulgadas la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario²³, y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aprobada a fines de mayo del 2004, que marcó el inicio de una etapa superior, en el empeño de reorganizar y adecentar la administración de la justicia²⁴.

Las Leyes Habilitantes por su lado, ya han sido aprobadas temporalmente, en su momento, por las tres quintas partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, para otorgar al Presidente de la República, poder suficiente, en la ejecución de medidas populares importantes que podrían ser obstaculizadas por la oposición²⁵.

²⁰ Así se puede apreciar en el art. 67 de la Constitución, donde también se habla de organizaciones con fines políticos.

²¹ Ver art. 66 y 72 respectivamente.

²² Ver: arts. 12 y 302-304.

²³ Esta condena el latifundio, reforzando el art. 307 de la Constitución, y establece las atribuciones del estado para proteger el derecho de todos a la propiedad rural y la obligación de garantizar la seguridad alimentaria de la nación.

²⁴ Mediante esta ley, se decidió ampliar a 32 el número de magistrados que integrara el TSJ, reforzar las funciones de la Sala Constitucional (privilegiada por sobre las restantes debido a su carácter de guardián de la Carta Magna), reconocer las facultades parlamentarias para remover de sus cargos a los jueces que incumplan sus obligaciones (previo análisis de casa caso por el Poder Moral y la Contraloría General de la Nación). La propia Sala Constitucional de TSJ aprobó una resolución donde establece que esas decisiones de arriba podrán ser aprobadas en el Plenario de la Asamblea Nacional, no por sus dos tercios, sino por mayoría simple, lo que echara por tierra las continuas objeciones de los diputados de la oposición.

²⁵ En fecha tan temprana como noviembre del 2000, el Parlamento autorizó al jefe de estado a aprobar directamente unas 36 leyes fundamentales sobre materias económicas y financieras, funcionamiento del estado

Todas estas transformaciones constitucionales, jurídicas y políticas en general, que marcaron los dos primeros años en la República Bolivariana de Venezuela, sin dudas, no habrían sido posibles sin una hegemonía de las fuerzas de izquierda, en detrimento de las conservadoras, durante todo el proceso inicial del cambio. Pero asimismo, ellas no habrían podido profundizarse ulteriormente, en el orden político, económico y social, e incluso ideológico, en detrimento de las elites oligárquicas, si el nuevo parlamento unicameral, no hubiera estado controlado mayoritariamente por los sectores populares.

Esto quiere decir, que al menos en el caso particular de este país, si el Movimiento V República (MVR), durante las megaelecciones de julio del 2000, junto al Movimiento al Socialismo (MAS) (lo que entonces conformaba el Polo Patriótico), no hubieran alcanzado los 99 puestos de diputados, de un total general de 165 bancadas, y no hubieran conquistado el control de 15 de las 23 gobernaturas de los Estados, y de al menos 200 alcaldías de las 350 en disputa²⁶, difícilmente, ellos habrían podido desarrollar los múltiples programas sociales que han beneficiado a millones de venezolanos hasta hoy.

Esta hegemonía de las fuerzas partidarias de Hugo Chávez, que, en octubre del 2004, incrementó su control a 20 de las 22 gobernaciones en juego y a 270 de las 335 alcaldías municipales en disputa, y en agosto del 2005, a casi 5000 de los 5999 concejales y miembros de Juntas Parroquiales electos²⁷, es presumiblemente también, la condición básica que ha llevado a Venezuela a liderar la integración latinoamericana, y a encabezar, junto a Cuba, la lucha del Tercer Mundo contra los afanes expansionistas de los imperios europeo y norteamericano.

La capacidad de tener el control casi total en la toma de decisiones a nivel nacional se hizo aún mayor con los resultados de las últimas elecciones al parlamento venezolano que tuvieron lugar el pasado 4 de diciembre. Por el retiro injustificado de las fuerzas opositoras al gobierno, de esos comicios, y sobre todo, por el prestigio de la dirección política que representa el actual presidente Hugo Chávez, los 167 escaños de la Asamblea Nacional Venezolana quedaron ocupados por las fuerzas de izquierda²⁸.

Una línea táctica y estratégica aproximada, parece haberse trazado el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, y el Movimiento al Socialismo (MAS) que él encabeza.

En este país de la región central de Suramérica, ocurren conflictos internos parecidos a los que tienen lugar en otras áreas geográficas, pero se distingue de algunas de aquellas, por el tipo de propuestas que hoy están brindando sus más importantes actores de *izquierda*.

y seguridad ciudadana.

²⁶ A estos datos, extraídos de los boletines de información de PL, publicados entre el 31 de julio y el 10 de agosto del 2000, se puede agregar que el Parlamento quedó integrado por:

El MVR-91 curules, el MAS-6, los delegados indígenas-3, el Partido Acción Democrática-33, Proyecto Venezuela-8, COPEI-5, Causa Radical-3 y otros partidos minoritarios-11.

También se puede documentar que de los 12 diputados al Parlatino, 8 son del MVR, y asimismo, que de los 5 diputados al Parlamento Andino, 3 pertenecen al MVR.

²⁷ Según datos de PL expuestos respectivamente en las revistas Orbe 6-12 de noviembre del 2004. p.16 y 13-19 de agosto del 2005 p.2

²⁸ La Alianza del Bloque del Cambio, liderada por el Movimiento V República (primera organización política del país), conquistó las representaciones al Parlamento Latinoamericano (12) y al Parlamento Andino (5). También ganó la mayoría de los asientos en el órgano legislativo. Mientras el MVR obtuvo 114 de los 167 escaños, los demás curules quedaron en manos de partidos de la Alianza como Patria para Todos, el Partido Comunista, la Unión Popular Venezolana y el Partido por la Democracia Social, entre otros.

También como los casos de Ecuador y Perú, las fuerzas de oposición boliviana son capaces de derrocar gobiernos sin terminar sus respectivos mandatos. A los bolivianos no le fue suficiente separar de la presidencia, en octubre del 2003, a Gonzalo Sánchez de Lozada, y en junio del año siguiente, a Carlos Mesa, sino que incluso, el último presidente transitorio, Eduardo Rodríguez, también corrió el riesgo de perder su cargo. Todo parece haber dependido de la capacidad que él tuviera para garantizar la celebración de elecciones generales²⁹ en los 180 días comprometidos a partir de la última gran crisis que lo llevó a ese puesto. Algo que, finalmente, se logró unos días después del compromiso original.

Pero la más notable distinción de esta experiencia, de la de otros países, es que la agrupación de *izquierda* más fuerte en el panorama político nacional, el MAS, estuvo encabezando las preferencias electorales³⁰ casi desde el inicio de su campaña, y tenía bien definidos sus objetivos inmediatos tras conquistar el gobierno.

Según los medios oficiales de este país, el 4 de diciembre del 2005, 8 fuerzas políticas debían competir por la presidencia³¹. De ellas 3 contaban con el mayor respaldo popular. Primero, la coalición que encabezaba Evo Morales y el MAS, segundo, la promovida por Alianza Siglo XXI y que representaba el ex presidente (2001-2002) Jorge Quiroga, y, finalmente, la del calificado centrista y magnate del cemento, Samuel Doria Medina, del grupo Unidad Nacional (UN).

En las últimas semanas, previo a la victoria electoral de Evo Morales, el frente amplio a que invitó el MAS, se siguió extendiendo. Sus filas se incrementaron con cooperativistas mineros, trabajadores fabriles, el sector magisterial, el Movimiento sin Tierra y otras nuevas organizaciones sociales y personas a título individual. Todos estos sectores populares, se sintieron atraídos por los planes de gobierno que prometía su candidato presidencial.

La propuesta programática esencial del futuro presidente, se basaba en la recuperación de los hidrocarburos y otros recursos naturales como propiedad del Estado, en la emisión de una ley acerca de la necesaria austeridad de las instituciones públicas, en la recuperación de los recursos que fueron robados por miembros de los gobiernos pasados, y, entre otras tareas para garantizar los esperados beneficios sociales, en fortalecer el sector económico con base en la micro y la pequeña empresa, y en el sector cooperativo. El plan también incluía la despenalización de la hoja de coca, al estimar que su producción es elemental para el sustento y el consumo de los nativos.

La confirmación de que en este país hacía falta no sólo adelantar las elecciones generales (previstas originalmente para el 2007), sino hasta realizar una Asamblea Nacional Constituyente que diera lugar a la creación de un nuevo sistema político, como también había

²⁹ Este tipo de elecciones, que supone la votación por un presidente y vicepresidente, y con la reciente reforma constitucional, el adelanto de las elecciones parlamentarias y las primeras elecciones para prefectos (gobernadores) departamentales, fueron convocadas como parte de un acuerdo político en junio, tras la salida de Carlos Mesa, quien fue reemplazado por el entonces titular de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez.

³⁰ La encuesta divulgada el 18 de septiembre del 2005, en el Diario La Razón, de La Paz, por la firma consultora Apoyo, Opinión y Mercado fue ilustrativa de este prestigio cada vez creciente. Según se constata, el estudio fue elaborado del 9 al 15 de septiembre entre 2150 personas, y tenía un margen de error de 2,1%.

³¹ Solo dos de los cinco partidos tradicionales, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Gonzalo Sánchez de Lozada, y Nueva Fuerza Republicana (NFR), inscribieron candidatos propios. Otras fuerzas tradicionales, la derechista Acción Democrática Nacionalista (ADN), del ex dictador Hugo Bánquer, quedó incluida como socia minoritaria de una alianza de agrupaciones ciudadanas.

propuesto Evo Morales³², además de otros conflictos que la hayan podido motivar³³, es la propia aprobación el 22 de septiembre del 2005, por parte del Tribunal Constitucional (TC) (a solicitud de los diputados de la rica región de Santa Cruz que también han rechazado las elecciones adelantadas y de acuerdo con la oligarquía regional que representan, han pedido autonomía en el manejo de sus recursos) de una resolución que obligó al parlamento³⁴ a hacer una redistribución de sus puestos, acorde al último censo de población actualizado en el 2001, en cada Departamento (provincia) del país.

Esta decisión, tomada después que la Corte Electoral (CE) había convocado a elecciones generales para el 4 de diciembre último, además de llevar consigo el debate del asunto entre todos los parlamentarios y dilatar la posible victoria de la *izquierda*, trató de establecer una nueva correlación de fuerzas, dentro del parlamento boliviano, para, posiblemente, aplazar los comicios, de manera definitiva, hasta la fecha en que originalmente habían sido concebidos en el año 2007³⁵.

A la denuncia de esta resolución del Tribunal Constitucional, hecha por el líder del MAS también durante una visita a París en la sede de la Asamblea Nacional Francesa, que puso de relieve los subterfugios de la *derecha*, se suman los últimos planteamientos del por segunda vez candidato a presidente, Jorge Quiroga, con relación a las formalidades técnicas de la elección.

Aunque en junio del pasado 2005, los principales contendientes habían acordado no competir en la definición parlamentaria, como establece la Constitución, en caso de que nadie ganara en primera vuelta con más del 50% de los votos, próximo a la victoria del MAS, el también candidato por el Partido Acción Democrática Nacionalista, le propuso a Evo Morales seguir las pautas establecidas por la Carta Magna. Esta propuesta, que no encontró eco en ninguno de los otros seis candidatos, fue alternada por su propio autor, con la idea de pactar una segunda vuelta electoral, algo que en Bolivia se considera anticonstitucional.

Así, todas estas trampas y evasivas que promueve *la derecha*, y que en los casos particulares de Bolivia y Venezuela, tienen el especial respaldo, no precisamente encubierto, del gobierno norteamericano, parecen justificar que las reformas económico-sociales que proyecten Evo Morales al frente del MAS, y Hugo Chávez, encabezando el MVR, como presidentes de sus respectivos países, tendrían que estar precedidas, obligatoriamente, por importantes transformaciones en el ordenamiento político.

³² La idea de “cambiar el sistema político y la historia del país” fue expuesta por el entonces candidato presidencial del MAS el 13 de octubre del pasado año, ante 10 mil personas, en la céntrica Plaza de los Héroes, celebrando su primer día de campaña electoral.

³³ La demanda popular de nacionalización de los recursos naturales que explotan de manera indiscriminada las empresas transnacionales, y la violación de los impuestos que estas deben pagar por las utilidades, han derivado en conflictos. Otros, han estado relacionados con la elección de prefectos (gobernadores) de los departamentos, por 4 años, a pesar de que la Constitución no prevé esa figura electoral, y solo establece su designación, por parte del Presidente.

³⁴ Esta redistribución, al tiempo que benefició a regiones ricas para dar más peso a sus votos congresionales, hizo perder escaños parlamentarios a Departamentos como Potosí, La Paz y Oruru.

³⁵ Si asumimos, como ha denunciado el candidato a vicepresidente por el MAS, Álvaro García Linera, y el propio candidato presidencial del derechista Poder Democrático Social (PODEMOS), Jorge Quiroga, que quienes promueven la decisión; el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y su jefe, Gonzalo Sánchez de Lozada, ocupan uno de los últimos lugares en la preferencia electoral, entonces, este análisis no parece ser descabellado. La posibilidad de postergar los comicios, también fue anunciada en su momento por los presidentes de la Cámara de Diputados, Norah Soruco, y del Senado, Sandro Giordano. Este último, a su vez, en caso de aplazamiento de las elecciones, había sido perfilado para sustituir al entonces presidente transitorio del país.

Esto significa, que en ninguno de los dos casos, parece ser posible dar solución definitiva a los más graves males sociales por que atraviesan sus respectivos pueblos, si, no sólo se perfila un proyecto económico-social austero y coherente que permita una expansión indetenible de las fuerzas productivas nacionales (en un contexto donde la sobrevivencia, por causa de la globalización imperante, requiere de economías sólidas y sustentables), sino, si también no se crea un nuevo sistema político que garantice, institucionalmente, la hegemonía política de las fuerzas populares, para, primero rescatar las conquistas sociales, y después, conservarlas.

Unas últimas apreciaciones aclaratorias.

El presente trabajo que concluye, a primera vista, tiene una aparente limitación: Deja fuera de las supuestas tres formas en que se ha revelado la actuación de la *izquierda*, durante los últimos años, a países como México, Nicaragua, El Salvador por ejemplo, donde hay una fuerte actividad revolucionaria (algunos de los cuales en los próximos meses, tienen posibilidades reales de llegar al gobierno), y a otros, como Argentina y Panamá, donde en determinado sentido, ya la *izquierda* llegó al gobierno. Pero amén que esa limitación puede resultar cierta, lo esencial para este autor, no es hacer una amplia clasificación donde tengan cabida todas las fuerzas y movimientos de *izquierda* de América Latina, sino demostrar, que aún en aquellos países donde el sujeto de transformación social es muy fuerte pero no logra articular la necesaria unidad, y en los que ya han concertado amplias alianzas políticas que les han permitido llegar al gobierno, las condiciones y concepciones sobre las que se ha pactado esa unidad, distan de ser hasta parecidas, y, consiguientemente, no tienen porque derivar en resultados similares.

Cuando se exponían los casos de Ecuador y Perú, no se ignoraba que en Honduras, Paraguay o Costa Rica, las fuerzas de *izquierda*, tampoco han alcanzado el necesario acercamiento. Sólo se intentaba mostrar dos ejemplos que revelaran hasta qué punto la *derecha* puede actuar de manera compacta, y movimientos revolucionarios tan fuertes, como los desarrollados en esos países, podían ser conducidos a un desgaste innecesario.

Los apuntes realizados sobre la experiencia del PT en Brasil y el FA en Uruguay no son casuales. Antonio Palocci encabezando el ministerio de economía en el gabinete del gigante sudamericano y Danilo Astori desempeñando el mismo cargo en Uruguay, no parecen ser dos cartas distintas en los intentos de sus respectivos presidentes de consolidar el crecimiento económico del país, sin encarar grandes conflictos con los tenedores del capital nacional y transnacional.

Al parecer, el retroceso social que trajo para estos países las políticas neoliberales aplicadas, durante más de 20 años, le otorgan a las elites gobernantes del PT y el EP-FA-NM, un espacio suficiente de maniobra para no enfrentar directamente al imperialismo, tampoco “coquetear” con las estructuras económicas internas de poder y, al mismo tiempo, ampliar los beneficios sociales. El dilema para esas fuerzas sin embargo, es cuándo se irá a producir el viraje hacia la radicalización de sus respectivos procesos, si es que realmente, eso ocurre. Algunos auguran que pronto. Otros, más escépticos, consideran que la simple voluntad, expresada en la trayectoria de *izquierda* que representan los presidentes Lula y Tabare, no será suficiente.

Una forma de conquistar el poder de manera más expedita y, obviamente, más conflictiva, debido a la confrontación directa que trae con los órganos tradicionales de dominación, parece ser la que se propone el MAS al frente de una alianza en Bolivia, y la que ya esta ejecutando el MVR en la República Bolivariana de Venezuela.

La idea de preceder los cambios económico-sociales, con transformaciones político-jurídico-institucionales, de carácter pacífico, que den lugar a un nuevo sistema político, realmente no

tiene antecedentes en el contexto latinoamericano. Pero no deja de ser un recurso inteligente para aquellas fuerzas políticas que desde que están en la oposición, no gozan del beneplácito de los organismos financieros internacionales y menos aun, del principal aportador de esos fondos; el gobierno norteamericano. Esta situación, en las condiciones de un sistema político frágil, al menos para los sectores tradicionalmente excluidos, hace vulnerables a las fuerzas que realmente necesitan el cambio, a cualquier subterfugio legal que se pueda tramar.

A la necesidad de esta importante transformación, que busca mayor independencia real, y mayor capacidad de la población en la toma de decisiones, se suma, que estos países tienen importantes recursos naturales y, especialmente, energéticos, que estimulan a las empresas transnacionales a tratar de conservar el control sobre ellos, o a alcanzarlo. En este sentido, habría que preguntarse si las conquistas sociales logradas hoy por la República Bolivariana de Venezuela, se habrían alcanzado, sin la constatación constitucional del control estatal sobre el petróleo, y este a su vez, sin la voluntad mayoritaria de las fuerzas de izquierda hegemónicas en el parlamento, de que este sea defendido en la práctica como un recurso estratégico.

Todo lo descrito en este trabajo, puede tener varias lecturas, pero para este autor, será suficiente, que de él se deduzcan las siguientes ideas fundamentales:

Primero, que la necesidad de que las fuerzas de izquierda se alíen entre ellas mismas, no es una simple retórica, sino la única manera en poder ser una alternativa mínima real a la derecha, que cuando percibe la potencial pérdida del control de las riendas fundamentales del poder económico, sí es capaz de actuar en bloque.

Segundo, que dentro de los marcos del sistema democrático liberal capitalista, efectivamente, todavía se pueden ejecutar reformas sociales que beneficien a la mayor parte de la población, y que no impliquen, de manera necesaria, un enfrentamiento significativo, y de principios, con los sectores nacionales y transnacionales que tienen el control de los recursos industriales y financieros internacionales. Pero esto depende de las características del país, de su historia política interna, y de las propuestas, esencialmente reformistas, que traigan consigo las fuerzas de *izquierda* que optan por el gobierno, o ya lo hayan alcanzado. Es importante entender que aunque esta es una opción que también goza de respaldo popular, tiene la limitante, de que como no es capaz de revertir el protagonismo burgués en la toma de decisiones a favor de los amplias masas excluidas, no podrá hacer una profunda redistribución de la riqueza, con sus consiguientes consecuencias, y por tanto, tampoco podrá insertarse en un panorama de integración internacional que privilegie a las economías más afectadas.

Tercero, que hay países donde la emergencia de la *izquierda* a un primer plano, ha sido parte de un proceso conflictivo que conjuga, de manera más cruenta, los intereses de las fuerzas conservadoras internas con los de las empresas transnacionales, y donde las leyes establecidas y las formas de acción política, limitan, de manera casi absoluta, no sólo la capacidad de decisión de los sectores populares, sino hasta su propio acceso y permanencia en el gobierno, el parlamento y su órgano judicial. En estas condiciones, parece poco probable, que una fuerza de *izquierda* sería, que pretenda otorgar amplios beneficios sociales a su población y garantizarlos, de manera estable, no promueva, como una tarea de principios, la realización de una Asamblea Nacional Constituyente que cree las condiciones para la formación de un nuevo sistema político, y, consiguientemente, la posibilidad de legitimar, a nivel constitucional, la capacidad real de los sectores sociales mayoritarios, tradicionalmente excluidos, de participar, hegemónicamente, en la toma de decisiones.

Y finalmente quisiera hacer constar una cuarta idea:

Que en las condiciones actuales, el único rasero que debe dividir a las fuerzas de izquierda de las de derecha, y que a su vez puede resultar un referente metodológico esencial para crear una sólida oposición revolucionaria a las fuerzas conservadoras, es la posición que se asuma frente

a las políticas neoliberales. Esto rompe con el viejo dilema de burguesía vs. Proletariado como símbolos principales de derecha e izquierda, pero permite comprender de una manera más objetiva que el desarrollo histórico tiene etapas y que algunas etapas, en determinadas condiciones de evolución del capitalismo, requiere de aliados tácticos que no necesariamente tienen que compartir los intereses estratégicos de los sectores tradicionalmente excluidos. Y es justamente en este contexto donde me gustaría destacar que aunque la posición que se asuma frente al neoliberalismo pudiera ser la condición que hoy divida a las fuerzas del progreso de las de la reacción, el problema fundamental de la izquierda sin embargo, no es solo determinar con quién aliarse para acceder al gobierno y promover un nuevo proyecto de construcción social, sino sobre todo definir alrededor de qué núcleo social se debe articular la alianza. Ahí parece estar la clave:

Si el poder real en el ejercicio de aprobación de las leyes, esta verdaderamente en manos de los sectores populares de trabajadores, entonces los programas sociales marcharan de manera indetenible, pero no gozaran del beneplácito de los dueños del poder tradicional. Por el contrario, si la hegemonía durante la toma de decisiones, la tienen los sectores oligárquicos nacionales y transnacionales, entonces los programas sociales, en determinadas condiciones, podrán avanzar, pero hasta un límite, y las fuerzas de izquierda que comparten el gobierno con los sectores conservadores, tendrán que romper sus viejas alianzas y buscar nuevas concertaciones políticas, de lo contrario, ellas habrán pasado a la historia como otras de las facciones mas moderadas de la derecha.